

«Corriendo el cerco de lo posible».
Cambio ideológico, malestar social y nuevo ciclo político en el Chile neoliberal

«Widening the limits of what is possible».
Ideological change, social malaise and new political cycle in neoliberal Chile

Omar Núñez Rodríguez.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México,

omar.nunez@uacm.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-7061-3625>

Historia editorial

Received: 31/08/2024
First Review: 24/10/2024
Accepted: 9/12/2024
Published: 31/12/2024

Palabras clave

Malestar social, Neoliberalismo, Activismo, Polarización, Ciclo político

Resumen

Contrario a lo que sugieren los resultados de los plebiscitos de 2022 y 2023, la mayoría de la población chilena sigue aspirando a un cambio de paradigma de país. Para explicar esta contradicción, el artículo tiene por propósito analizar un conjunto de actores y factores que han contribuido a arrinconar ideológicamente al neoliberalismo en Chile. Entre otros, clave es la militancia y el activismo de múltiples organizaciones, cuyas agencias han posibilitado abrir “el horizonte de lo posible”. Asimismo, también facultan observar las limitantes y restricciones ideológicas del denominado “estallido social”. Se concluye que la nación sudamericana estaría ante un nuevo ciclo político, uno caracterizado por proyectos políticos en disputa.

Núñez Rodríguez, O. (2024). «Corriendo el cerco de lo posible». Cambio ideológico, malestar social y nuevo ciclo político en el Chile neoliberal, *Anuario del Conflicto Social*, 15, e-47546. <https://doi.org/10.1344/ACS2024.15.11>

Resum: «Ampliar els límits del que és possible».

Canvi ideològic, malestar social i nou cicle polític en el Xile neoliberal

Paraules clau

Malestar social, Neoliberalisme, Activisme, Polarització, Cicle polític

Contràriament al que suggereixen els resultats dels plebiscits de 2022 i 2023, la majoria de la població xilena continua aspirant a un canvi de paradigma de país. Per explicar aquesta contradicció, l'article té el propòsit d'analitzar un conjunt d'actors i factors que han contribuït a arraconar ideològicament el neoliberalisme a Xile. Entre d'altres, són clau la militància i l'activisme de múltiples organitzacions, les agències de les quals han fet possible obrir «l'horitzó del que és possible». De la mateixa manera, aquestes permeten observar les limitacions i les restriccions ideològiques de l'anomenat «esclat social». S'hi conclou que la nació sud-americana estaria davant d'un nou cicle polític, un caracteritzat per projectes polítics en disputa.

Abstract

Keywords

Social unrest, Neoliberalism, Activism, Polarisation, Political cycle

Contrary to what the results of the 2022 and 2023 plebiscites suggest, most of the Chilean population continues to aim for a paradigm shift for the country. To explain such a contradiction, the article intends to analyze a series of actors and factors that have contributed to ideologically corner neoliberalism in Chile. Among others, one of the key elements for this has been the militancy and activism of multiple organizations, whose agencies have made it possible to open “the horizon of what is possible”. Likewise, they also allow us to identify the limitations and ideological restrictions of the so-called “social outbreak”. It is concluded that the South American nation might be facing a new political cycle, one characterized by contradictory political projects.

Introducción

Un aspecto paradójico que entregan los denominados “plebiscito de salida” del 4 de septiembre de 2022 y del 17 de diciembre de 2023 en Chile –contendias donde el 62% y 56% de los votantes, respectivamente, se inclinó por impugnar las propuestas de cambio de Constitución– es no invalidar los malestares que activaron la profunda crisis política en la que se encuentra sumido desde hace un lustro este país. Encuestas realizadas a una semana de la realización de la primera consulta reportaban que casi un 80% de los consultados refrendaban iniciar nuevo proceso Constituyente¹. Y si bien diversos estudios de opinión pública indican que una mayoría de la población no está en disposición de apoyar un tercero en el 2024, esta negativa tiene más que ver con la desconfianza ciudadana a partidos políticos e instituciones (consideradas responsables por abanderar un segundo proceso constituyente elitista y conservador) que con el deseo de renunciar a impulsar cambios sustantivos para el país. Además, inciden los cambios en las prioridades de la población tras cinco años signados por los impactos de la pandemia, incremento de la criminalidad o el cansancio con las múltiples convocatorias electoras, entre otros factores.

Con todo, que un 40% del electorado se adscriba por modificar el orden establecido (hace 35 años era un 5%) y otro 30% muestre interés selectivo sobre el mismo tópico, denota la progresiva expansión de un imaginario social que ambiciona superar el “Chile actual”. Relativizar estos datos, tal como lo hacen algunos analistas, implica no solo invisibilizar las potencialidades disruptivas emergidas, también desdibujar las motivaciones que viabilizaron la movilización. En particu-

¹ <https://www.france24.com/eminento-a-minuto/20220907-primera-reuni%C3%B3n-pol%C3%ADtica-para-establecer-calendario-de-nueva-constituci%C3%B3n-en-chile>

lar, las dinámicas que permitieron la politización de las desiguales, sin la cual no se puede entender el ciclo de protestas y los procesos constitucionales surgidos. Ambos procesos exteriorizan ideales, sueños y aspiraciones, pero también cansancios, hartazgos y temores. Anhelos y agravios brotados en una sociedad decepcionada y desilusionada con un orden institucional que parece poner en el centro de la modernidad la constitución de una *servidumbre voluntaria* entregada a las leyes del mercado:

A pesar del dinamismo de la sociedad –señala el PNUD– Chile está experimentando dificultades para cambiar. Los sucesivos intentos por reformar el sistema de pensiones, para resolver problemas en el área de la salud o los fracasos reiterados de los procesos constituyentes ilustran el fenómeno. Las dificultades del país para cambiar se expresan también en las percepciones subjetivas: las personas consideran que aquello que realmente importa –los cambios profundos, prometidos y esperados en materia de derechos y protección social– no se han concretado (...); de allí que [se] perciba un país estancado o que va de mal en peor (2024: 229).

Podemos comprender, por lo tanto, como un marginal aumento en la tarifa del metro de Santiago sirviera como detonador de un ciclo de protestas superior en masividad y durabilidad a las acaecidas bajo la dictadura; de la cual, además, brotó una dinámica social tan invertebrada como antipartidista pero profundamente política.

Para explicar este “desborde ciudadano”, varias tesis fueron esgrimidas desde la academia, medios y campo político. Sirven para esclarecer las motivaciones del estallido, pero también para comprender sus restricciones y contradicciones, palpable con los resultados electorales de 2022 y 2023. Un rápido recuento permite detectar tres grandes interpretaciones. Según algunos autores, las protestas responderían a un “malestar del éxito”. Es decir, expresaría una crisis de expectativas, esto es, la población demanda más acceso a los beneficios del mercado. Según Andrés Oppenheimer, las movilizaciones chilenas “son más parecidas a las de los ‘indignados’ en España (...) Reflejan una crisis de expectativas incumplidas en países desarrollados”². Las valoraciones vertidas por Carlos Peña son convergentes. Para este abogado, la protesta expresa un malestar con una modernización mercantil multifacética, la cual –por su naturaleza– conlleva permanente desasosiego. De tal forma, las movilizaciones no constituirían un cuestionamiento al orden instituido, tan solo expresarían “[un] estallido emocional de índole genera-

² <https://www.lanacion.com.ar/opinion/las-protestas-chile-son-del-primer-mundo-nid2300106/>

cional” alentado “por ciertos problemas de legitimidad del tipo de modernización que Chile lleva adelante”³.

Un segundo grupo hace hincapié en que el estallido emana de la combinación entre agotamiento del patrón de incorporación y la persistencia de una institucionalidad inflexible, amalgama capaz de llevar a crecientes sectores a declarar insostenibles las desigualdades. En esta línea se hallan las observaciones de Rossana Castiglioni, quien afirma que la movilización social responde “no solo a una pugna redistributiva sino también a tensiones de naturaleza política” (Castiglioni, 2019: 6). Por su parte, José Urzúa y Matías Calderón exploran la protesta a partir de la interacción entre las condiciones sociales precarizadas y las matrices valóricas con las cuales la población juzga su cotidianidad. De esta manera –aseveran– “[las] condiciones del transporte configuraban una experiencia diaria que daba cuenta de la posición de clase (...) Es por eso que el estallido ocurre en torno al transporte” (Urzúa y Calderón, 2020: 292). Octavio Avendaño y Nelson Osorio ponen acento en el carácter incompleto del proceso de democratización chileno. Para ambos investigadores, la precariedad del sistema político y la incapacidad de las instituciones para procesar antiguas y nuevas demandas constituyen factores a considerar a la hora de comprender la masiva desafección electoral y el transversal cuestionamiento hacia las instituciones. Por lo mismo, advierten que estos mismos componentes constituyen una barrera para procesar, dentro de los actuales marcos, el malestar social; de tal forma, sugieren, “ni la revuelta ni los acontecimientos que políticamente acompañan la llamada “solución constitucional” logran revertir la crisis de legitimidad existente previamente” (Avendaño y Osorio, 2021: 8). Para concluir con esta línea de análisis, Mauricio Morales pone el acento en cuatro problemáticas político-institucionales, incluyendo “una crisis de probidad pública y privada”. El resultado –sugiere– fue posibilitar un creciente “malestar con la democracia”, pues, con cada elección presidencial, “[reaparecieron] los fantasmas de siempre: frustración, rabia y angustia” (Morales, 2020: 23).

El tercer núcleo de reflexiones centra sus análisis en lo que podríamos denominar “crisis cognitiva” del modelo, es decir, del soporte valórico, cultural y categorial que viabilizó la constitución de un sistema reglas y de creencias socialmente aceptadas. Desde una perspectiva cultural funcionalista, Marta Lagos recalca que el acelerado proceso de secularización y el impacto disolvente de la dinámica mercantilizadora al interior del tejido social, habrían terminado por provocar una

³ <https://www.t13.cl/noticia/politica/nacional/una-conmocion-pulsional-generacional-analisis-carlos-pena-protestas-chile2>

peligrosa “falta de sentido”. La anomia resultante se traduciría en un colapso del sistema de creencias, desafección ciudadana y violencia molecular⁴. A partir de otra premisa, Alberto Mayol sentencia que el 18 de octubre es producto de un “desequilibrio normativo”. A juicio de este sociólogo, el estallido nace de la incongruencia entre los soportes valóricos y prescriptivos del modelo y la mecánica con la cual opera la sociedad neoliberal. Por lo tanto, “cuando no se respetan las bases culturales de un grupo” –sentencia Mayol– “[la] sociedad se erosiona” (Mayol, 2020: 40-44). Convergentes son las reflexiones de Tito Flores y de Eugenio Tironi. Si la incorporación neoliberal brota del consumo, emprendimiento y la iniciativa personal, en los mismos marcos interpretativos –considera Flores– encontramos los elementos para enjuiciar su desempeño, lo que explica cierta aspiración refundacional (Flores, 2020: 42-46). Para Tironi, la insubordinación popular “[constituye] una rebelión contra los mecanismos de disciplina que tiene la sociedad democrática”, más precisamente, un hartazgo en contra del mercado como mecanismo de coordinación social”⁵.

Con excepción de Mayol, el común de denominador de los autores es no explicitar cómo aconteció el proceso nacional de politización de las desigualdades y agravios. En este sentido, desde el campo de la historia reciente, estudiaremos la estructura u orden evolutivo de las luchas antineoliberales en Chile por medio de algunos conflictos sociales más significativos. El objetivo es captar las fases e instancias que van estructurando la creciente incorporación de nuevos sectores sociales a la movilización. Postulamos que la politización e incorporación de crecientes sectores resulta de la militancia y el activismo propiciado por un heterogéneo grupo de organizaciones sociales y políticas, cuyas agencias, al contribuir en traspasar los “límites instituidos”, posibilitaron abrir “el horizonte de lo posible”; esto es, brindar un diagnóstico explicativo de los problemas del mercado y ofrecer, al mismo tiempo, una alternativa plausible al modelo instituido. Asimismo, la misma dinámica social sirve para observar las limitantes y restricciones ideológicas del denominado “estallido social”; es decir, revela los motivos y temores esgrimidos por diversos sectores populares la hora de votar en contra de la primera iniciativa de propuesta constitucional.

El escrito está organizado en cuatro apartados: El primero tiene por propósito presentar algunas problemáticas estructurales que contribuyeron a instalar un sentimiento de malestar en la población; en el segundo, por medio de un conjunto de casos, se aborda la politización de los agravios acontecidos; el siguiente apar-

⁴ <https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/12/04/la-anomia-que-nos-inunda/>

⁵ <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/tironi-y-la-crisis-politica-por-protestas-en-el-metro-los-politicos-pueden-ser-sus-proximas-victimas/866753/>

tado centra el análisis en el rol de ciertos agentes en formular una crítica política e ideológica a las políticas mercantiles, incorporar masivamente a nuevos sectores a la movilización y ofrecer una alternativa programática al modelo imperante. En el cuarto, y último, apartado se entregan algunos motivos que estarían detrás de la victoria del “rechazo” en el plebiscito de 2022, pero también del fracaso de la propuesta conservadora de 2023.

I. Una modernización frágil y precaria

A primera vista, el denominado “estallido social” del 18 de octubre de 2019 tiene mucho en común con la situación política vivida en Ecuador el mismo mes, Colombia en mayo y junio del 2021 o Perú en el 2023, cuando el alza en la canasta básica, la corrupción creciente, el hartazgo con las instituciones políticas o la violencia policial fueron declaradas insoportables por la población. No obstante, lo distintivo de la protesta chilena estuvo en la capacidad de poner en jaque la formación socioeconómica imperante. Por consiguiente, lo sucedido en Chile tendría más similitudes con el “Caracazo” de 1989 en Venezuela o con el “verano caliente” del 2001 en Argentina. En efecto, en el transcurso de una semana las y los chilenos atestiguaron el resquebrajamiento ideológico de las bases del modelo neoliberal, como también de la Constitución y del régimen político consensuados entre la derecha y la centroizquierda 30 años antes; visibilizando por medio de masivas movilizaciones la profunda crisis de representación.

La esencia del problema estriba en la crisis del sistema de creencias y marcos cognitivos que habían entregado hegemonía al neoliberalismo, el cual, mientras proyectó expectativas de realización personal, pudo reproducirse. En efecto, el caso chileno constata lo estipulado por diversos autores: mientras la sociedad internaliza o tenga expectativas que el sistema los beneficia, la auto represión funge como un dispositivo capaz de contener el malestar e inhibir la aparición de nuevos relatos (Velasco, 2008). Sin embargo, un heterogéneo y disperso descontento social –expresado con paros laborales, movilizaciones estudiantiles, protestas regionales, demandas étnicas, etc.– progresivamente puso en evidencia la generalizada insatisfacción que cruza a la mayoría de la población. El común denominador de estas expresiones moleculares es un hecho sintomático: son hijas legítimas del neoliberalismo, es decir, de las asimetrías provocadas por el crecimiento económico; por los atributos excluyentes de la “democracia protegida”; la naturaleza opresiva de la sociedad de mercado; el uso de prácticas patrimonialistas y corruptas; por la lógica extractivista y depredadora con la que opera el capital; pero también, de una “revolución de expectativas” incumplidas producto

de una de una modernización conservadora “frágil y precaria” (Filgueira *et al*, 2012).

En efecto, desde el 2006 (año de la protesta de los estudiantes secundarios por la baja calidad de la educación pública), la brecha entre las expectativas sociales y la calidad de vida se fue ampliando, conllevando una sensación de crisis de incorporación. Como bien indica Analía Álvarez, la mercantilización del sistema educativo “reproduce las desigualdades de origen de los estudiantes, ya que los agrupa de acuerdo a su situación socio-económica en los distintos tipos de establecimientos existentes” (Álvarez, 2011: 415). De tal forma, este sistema ha terminado por constituir un mecanismo de segregación social, desigualdad espacial, explotación laboral y, sobre todo, endeudamiento estructural para las familias. En esto último, rol determinante lo tiene el endeudamiento por estudios superiores, pues, en Chile, todo el sistema educativo universitario y de formación técnica se encuentra mercantilizado. Clave fue la implantación, en el 2005, del denominado Crédito con Aval del Estado (CAE); sistema que tiene por objetivo facilitar el acceso a los estudios profesionales a estudiantes con dificultades económicas por medio de la entrega de un crédito otorgado por la banca a las instituciones de educación superior, sean estatales o privadas. Si bien este mecanismo contribuyó a incorporar un volumen mucho mayor de estudiantes que en antaño estaban imposibilitados de acceder a esta etapa formativa, el hecho de contraer un préstamo que opera con una tasa de interés alta contribuyó en pocos años a ahogar a las familias con cuotas difícil de cubrir. Con excepción de algunas carreras, los ingresos destinados por un profesional para pagar las cuotas del CAE significaban ya en el 2011 un 30% del salario mensual (Rivera, 2018). Percibido como una forma de violencia estructural, el endeudamiento universitario contribuyó a forjar un sentimiento de injusticia generalizado; el cual, paulatinamente, contribuyó a erosionar la confianza en el mercado desregulado como mecanismo de coordinación social. Por este motivo las movilizaciones universitarias del 2011 fueron un parteaguas en el resquebrajamiento del sentido común neoliberal al (re) instalarse en el imaginario social el derecho a la educación pública y gratuita, demanda resumida en la consigna “no al lucro”.

Tales agravios no solo son perceptibles con el endeudamiento universitario, la baja calidad de la educación pública y el carácter clasista con el que opera el mercado de trabajo profesional (donde importa más la universidad donde se estudia, las redes sociales en las que participas, el barrio donde habitas); sobre todo se observa en las relaciones de producción, caracterizadas por las ínfimas jubilaciones que entregan el sistema de capitalización privado y los bajos salarios que posibilitan un régimen laboral que alienta la precarización del empleo. En efecto, gracias a las Asociaciones de Fondos de Pensión (AFPs), las jubilaciones han ter-

minado por ser escandalosamente bajas, empujando a muchos asalariados en edad de jubilar a continuar laborando. Para que se entienda la problemática, a fines de 2019 y tras cotizar durante 25 o 30 años, las y los jubilados cobraban unos 377 US\$ mensualmente. No obstante, el 50% recibió menos de 266 US\$, variando la cifra según el género⁶. En el caso de los salarios, aun cuando los indicadores declaran una cifra de 25,891 US\$ per cápita en el 2018, no hay correlación entre este dato estadístico con el ingreso real de la fuerza de trabajo⁷. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el promedio de ingresos de un trabajador era de 787 US\$ para el 2019, pero la mitad obtuvo un salario mensual igual o menor a los 528 US\$, lo mismo que decir 6,260 US\$ al año (24.18% de lo indicado por el PIB per cápita). Sin embargo, mientras los ingresos medios de los hombres eran de 9,162 US\$, el 50% solo ganaba 585 al mes. En el caso las mujeres los números son más bajos, alcanzando 659 y 459 US\$, respectivamente⁸. Quiere decir que el 50% de los trabajadores, de forma autónoma y tan solo con sus ingresos del trabajo, “[no] podrían sacar a un grupo familiar promedio de la pobreza” (Durán y Kremerman, 2020)⁹.

La contracara de las bajas jubilaciones son las altas ganancias de las citadas AFPs. Un estudio de Fundación Sol informa que –después de cuatro décadas– el monto global de los fondos acumulados era de 212.860 millones de dólares a inicios del 2019, equivalente al 71.42% el PIB de Chile. Recursos que sirven, sin embargo, para aplicar una política de financiarización que beneficia a diversos consorcios empresariales (Galvéz y Kremerman, 2019). En efecto, gracias a un marco legal que autoriza a las AFP disponer de las cuotas de sus inscritos, el 58.4% de los ahorros de los trabajadores se utilizó en el 2018 para capitalizar a los grandes grupos empresariales incluyendo instituciones del Estado (entre ellas Banco Cen-

⁶ El malestar social con las pensiones podría ser más intenso sino fuera por la posibilidad de acceder a la Pensión Básica Solidaria (PBS) de Vejez e Invalidez, asignación que el Estado paga mensualmente a las personas que por diversos motivos no reciben ningún tipo de pensión (porque no cotizaron en el sistema o porque habiéndolo hecho, se le agotaron los fondos que tenía en su cuenta de capitalización privada). Dirigida al 60% de la población más vulnerable, esta política compensatoria contribuye a que el círculo vicioso de la pobreza se repita, pues solo tiene por objetivo aliviar ciertos síntomas sociales. Para octubre de 2019, el monto mensual equivalía a unos 152 US\$.

⁷ En marzo de 2019 el Banco Central informó que el per cápita por habitante (medido por paridad de compra) era de 25,891 US\$. Frente a este dato, un economista señalaba con optimismo: “este aumento nos acerca paulatinamente a lo que ha sido la meta de varios presidentes de la República, prácticamente desde el presidente [Ricardo] Lagos en adelante, que es *el sueño de hacer de Chile un país desarrollado*”. <https://www.emol.com/noticias/Economia/201903/19/941583/PIB-total-del-Chile-al-borde-los-US300000-millones-Expertos-analizan-el-alza-de-la-economia.html>, cursivas mías.

⁸ <https://www.ine.cl/docs/default-source/encuesta-suplementaria-de-ingresos/publicaciones-y-anuarios/s%C3%ADntesis-de-resultados/2019/s%C3%ADntesis-nacional-esi-2019.pdf>

⁹ Además, 11,5 millones de personas están endeudadas (80% de los mayores de 18 años).

tral y Tesorería General de la República). En el caso del sector privado, los fondos de las administradoras nutren al sector financiero, empresas de servicios básicos, *retail* y a grandes conglomerados de negocios. Del mismo modo, en el 2020, se cifra en 81.439 millones de dólares –40% de la cartera– el volumen generado por los trabajadores que fue invertido en el extranjero para subvencionar a los mismos holdings nacionales¹⁰. Por consiguiente, estamos ante un sistema económico que se distingue por aplicar un “extractivismo de derechos sociales”, esto es, extraer plusvalor por medio de la mercantilización de los derechos instituidos (pensiones, educación, salud) para invertirlos en el sector privado: sea inyectando liquidez a la masa monetaria, refinando las deudas del gran capital, permitiendo nuevas inversiones al empresariado, o que los bancos dispongan del efectivo para –irónicamente– prestar dinero a un trabajador endeudado y que cotiza en alguna AFP.

Considerando estos antecedentes, llama la atención que sean los “intelectuales orgánicos” de la modernización neoliberal (tecnocracia, académicos del *mainstream* liberal, *think tank*, encuestadoras y equipos de inteligencia) quienes expresaran sorpresa e incompreensión ante la masiva y violenta protesta de octubre de 2019. Podemos citar al ex ministro de educación José Joaquín Brunner, quien, con enfado, mostrará extrañeza por los acontecimientos sucedidos: “Mis primeras sensaciones fueron de mucho pesimismo. Me produjo una gran reacción negativa ver esa violencia completamente anárquica, sin objetivo político, sin ideología, sin organización, sino un estallido, auténticamente una revuelta”¹¹. Representativa del desconcierto y ausencia de lectura única entre las instituciones de estado (incluyendo equipos de inteligencia) fue el cruce de declaraciones entre el jefe de defensa general Javier Iturriaga y el presidente Sebastián Piñera. Mientras el exmandatario declaró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”¹², el uniformado se desmarcó de su superior al afirmar: “yo soy un hombre feliz, la verdad es que no estoy en guerra con nadie”¹³.

¹⁰ <https://www.fundsociety.com/es/noticias/pensiones/las-afps-chilenas-han-aumentado-en-4350-millones-de-dolares-la-inversion-en-fondos-extranjeros-durante-el-primer-semester>

¹¹ <https://eldesconcierto.cl/2022/10/22/brunner-y-el-octubrismo-el-espiritu-de-la-revuelta-se-acaba-cuando-entra-al-mundo-real>

¹² <https://www.dw.com/es/pi%C3%B1era-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-poderoso/a-50910426>

¹³ <https://www.cnnchile.com/pais/general-iturriaga-soy-un-hombre-feliz-no-estoy-en-guerra-con-nadie-20191021/>

Asunto incomprensible tratándose de personas que disponen de acceso a estadísticas y estudios sociales, los cuales –desde hace años– diagnosticaban los problemas y malestares acumulados. Un temprano informe del PNUD, por ejemplo, advertía que $\frac{3}{4}$ de la población tenía sentimientos negativos hacia el “modelo”, mientras que el 52% se sentía perdedor en un orden social que promueve la competitividad por sobre la solidaridad (PNUD, 1998). Para entonces un conformismo fatalista parecía rodear a vastos sectores, expresado en un inmovilismo social que –a ojos de la tecnocracia e ideólogos de la desaparecida Concertación– era sinónimo de satisfacción. No obstante, un aspecto medular era denunciado reiteradamente en este tipo de trabajos: además de la pobreza es la desigualdad en términos de esfuerzo personal lo que cuestiona los éxitos de la modernización neoliberal. Por estos motivos otro documento más reciente del PNUD (2017) se atrevió a vaticinar:

[Las] personas declaran que lo que ganan no refleja el esfuerzo que realizan en su trabajo, y perciben que el salario no cubre las necesidades reales de sus familias. Hay entonces un principio de necesidad que subyace a una crítica sobre los salarios y las pensiones. Dignidad, seguridad, necesidad son orientaciones normativas que catalizan demandas por una mayor justicia social. Todos estos elementos culturales pueden ser, cuando se generalizan, *un potente catalizador de cambios sociales* (PNUD, 2017: 43).

En consecuencia, la movilización de octubre de 2019 responde a la convergencia de diversos malestares y agravios larvados durante años. Surge de: a) una crisis de expectativas para vastos sectores que creyeron tanto en la esperanza democratizadora del pacto de transición como en la promesa de integración del mercado, pero que hoy viven de precarizadas, extensas y agotadoras jornadas de trabajo; b) una profunda sensación de sentirse “perdedores” y experimentar –al final de sus vidas– inseguridad económica y empobrecimiento estructural. Aquí nos referimos a la generación que inauguró el “modelo” hace 4 décadas (70 años o más), a quienes se les prometió que jubilarían con el 100% de su salario; y c) ausencia de futuro para aquellos que recién ingresan al mercado de trabajo. Malestares y agravios que confirman un hecho medular: la meritocracia, el emprendimiento y el esfuerzo personal difícilmente constituyen, para las mayorías, una vía de movilidad, reconocimiento e incorporación social.

II. Politizando las desigualdades

La transversal protesta de 2019 no cabe interpretarla como un fenómeno político espontáneo. Por el contrario, su emergencia y extensión es proporcional al acti-

vismo encabezado por diversas organizaciones; claves en cuestionar la naturaleza antisocial del modelo, politizar las desigualdades socioespaciales, al tiempo que procuraron ofrecer alternativas al mismo.

Entre los movimientos sociales con capacidad de agenciar destacan la Confederación de Estudiantes de Chile, quien cuestiona el carácter mercantil del sistema educativo; el activismo del movimiento No + AFP, organización de base sindical pero con vocación de masas que promueve una alternativa al sistema jubilaciones; expresiones territoriales como Ukamau, la cual nace para promover “el derecho a la ciudad”; la oposición de diversas organizaciones Mapuches al extractivismo en sus territorios; o los paros de los trabajadores en contra del denominado “Plan Laboral”, el cual favorece la precarización del empleo y el uso de prácticas antisindicales.

A pesar del declive de las organizaciones obreras –por los cambios en la estructura del trabajo, pervivencia de un marco normativo favorable a la patronal y el impacto de la represión política durante la dictadura– la incidencia de este histórico actor radica en denunciar las injustas condiciones laborales y contrarrestar los nocivos efectos del denominado Plan Laboral con base en utilizar –como estrategia de resistencia– “la movilización legal” (Gutiérrez, 2020: 586). Aun cuando diversos autores cuestionan los beneficios que puedan haber otorgado el privilegiar esta forma de movilización, la eficacia de emplearla reside en permitir sortear las estrategias individuales de negociación imperantes al lograr llevar a la mesa de conciliación, de forma grupal, un número cada vez mayor de quejas y demandas, cuyos resultados han posibilitado avanzar en recuperar una cultura de derechos laborales, entre ellos, creación de nuevos sindicatos, negociación colectiva e interempresas.

Para la consecución de estos propósitos, sin embargo, los sindicatos no han abandonado tradicionales formas de movilización y de protestas, siendo las movilizaciones de los portuarios (2020 y 2021), del sector *retail* (Walmart 2019), la huelga de los subcontratistas de la estatal Corporación del Cobre (Codelco), o la de trabajadores forestales –ambas en el 2007– expresión de estas continuidades. El común denominador de estas movilizaciones fue traspasar “el sentido de los límites”, es decir, por superar las lógicas individualistas, atomizantes y heteronómicas arraigadas entre los trabajadores, y por erosionar el marco normativo imperante, al alentar la conformación de sindicatos inter-empresas e impulsar negociaciones por rama, aun cuando esta última carecía de reconocimiento legal:

El movimiento laboral que se registraba estos días en la zona de Arauco – señalaba en mayo de 2007 un articulista– era considera justamente “sim-

bólico” porque implicaba uno de los mayores movimientos reivindicativos y que, además, *traspasaba el límite* de la negociación sindicato-empresa, planteando una negociación directa con el holding central y no con las filiales o contratistas¹⁴.

La eficacia en utilizar formas de lucha por fuera de las normas y canales instituidos fue denunciado el empresariado. Entre las críticas formuladas a la negociación entablada por Codelco con los trabajadores subcontratados encontramos la del empresario Eliodoro Matte: “hemos sido testigos de una decidida acción de agitación laboral tendiente a promover *por la vía de los hechos* cambios en la legislación”¹⁵. Temor refrendado por el ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Luis Schmidt, quien aseveró: “Estamos viendo actuaciones que no veíamos hace 30 años, y todos sabemos lo que nos pasó cuando empezamos a caminar por ese desfiladero, que usted sabe cómo parte pero no sabe cómo termina, en un conflicto que escalará peligrosamente”¹⁶.

Por lo tanto, uno de los fundamentos del apoyo popular a la movilización del 2019 se haya en impugnar el abusivo régimen de trabajo; al tiempo que la legitimidad adquirida por diversas expresiones de protesta se asienta en cierto imaginario social sobre la pertinencia en el uso de diversas formas de lucha. Estas van desde marchas pacíficas, paros y cacerolazos, hasta el uso de barricadas, quema de autobuses y enfrentamientos con la policía. Como los cometidos por los subcontratistas de Codelco: sea para visibilizar agravios y denunciar arbitrariedades; presionar a las autoridades para que intermedien; o que sirvan para establecer una nueva legalidad. Es decir, desobediencia civil como instrumento de agencia popular. Como sentenciara una mujer entrevistada por la televisión a días de iniciado el estallido: “si no hubiéramos hecho todo este alboroto jamás nos habrían escuchado”. Lo presagió en el 2007 Antonio Delfau, jesuita y ex director de la revista *Mensaje*:

[El] celo por el modelo ha permitido una cierta credibilidad internacional, cierta facilidad para que lleguen los inversionistas. Pero hoy ya hay un malestar, una impaciencia de amplios sectores que no participan del progreso del país, y eso no se soluciona con represión. Cuando Ovalle (presidente de la CPC) dice “es intolerable esto de las explosiones sociales, no se pueden

¹⁴ <http://www.chilesustentable.net/2007/05/un-muerto-deja-protesta-de-trabajadores-de-forestal-bosques-arauco/> cursivas son mías.

¹⁵ “Diálogo social vs alarma empresarial”, *La Nación*, 2 de agosto de 2007. Cursivas son nuestras.

¹⁶ “Huelgas: Empresarios aluden a la UP en críticas al gobierno”, *La Nación*, 22 de agosto de 2007.

seguir aguantando”; ojo, porque hay que considerar que, *si no hay fuegos artificiales, estas cosas no aparecen en los medios*¹⁷.

Sin embargo, decisivas en sensibilizar amplios sectores sociales, fueron las protestas entabladas por los habitantes de pequeñas y empobrecidas ciudades que viven contiguo a las denominadas “zonas de sacrificio”; término acuñado para designar lugares con una concentración masiva de industrias contaminantes pero consideradas claves para el crecimiento económico (Astudillo, F. *et al*, 2024). Problemática que prueba los vacíos normativos con los cuales se sostiene la dinámica inversora del capital extractivista, las graves consecuencias sociales y ecológicas que conlleva una regulación medioambiental laxa y falta de voluntad fiscalizadora por parte de las autoridades¹⁸.

Caso emblemático de conflicto socioambiental fue la lucha entablada por los habitantes del pequeño poblado de Freirina –Valle de Huasco, región de Atacama– quienes se movilizaron en contra de los negativos efectos a la salud pública ocasionados por la instalación de una planta faenadora de cerdos, *Agrosuper*, en el 2005. La puesta en marcha de esta factoría –proyectada para alimentar a 2.5 millones de cerdos– ocasionó graves malestares a la población por los malos olores producidos. Según un testimonio recabado por una ONG defensora del medioambiente, la instalación de *Agrosuper* “trajo consecuencias como dolores de cabeza, estomacales, respiratorios y psicológicos. El olor asqueroso afectaba la concentración de los niños, traía alteraciones respiratorias a las personas que sufrían de asma y malestares estomacales”, imposibilitando a los niños a jugar al aire libre, hacer ejercicios físicos en el colegio y los habitantes encerrarse permanentemente en sus casas¹⁹. Tras años de inútiles solicitudes ante las autoridades, los pobladores de Freirina adoptaron diferentes formas de lucha para visibilizar sus agravios: desde cacerolazos hasta enfrentamiento con la policía, logrando, finalmente, el cierre de la instalación en diciembre de 2012. En este sentido, conflictos como el reseñado constatan los peligros de la mercantilización de la vida social (en este caso, un descontento radical ante la nula capacidad de planificación urbana con perspectiva ambiental), pues posibilita captar la subjetividad que predomina entre las y los chilenos: un sentimiento de incertidumbre y desamparo sobre sus vidas, no solo como asalariados también en su condición de ciudadanos.

Producto de la permisividad que ofrece al capital el estatuto de inversión instituido con las políticas mercantiles, los crecientes conflictos medioambientales ocu-

¹⁷ “El conflicto social llegó para quedarse”, *La Nación*, 12 de agosto de 2007. Cursivas son mías.

¹⁸ <https://www.terram.cl/carbon/2019/06/las-cinco-zonas-de-sacrificio-de-chile/>

¹⁹ <https://codexverde.cl/freirina-el-conflicto-que-evidencio-el-problema-de-olores-industriales-en-chile/>

pan lugar destacado en visibilizar la irracionalidad con la que opera el neoliberalismo. Acontece con el agua, considerado “bien de mercado” –caso único en el mundo–, de forma que su dominio se encuentra privatizado y concentrado en los grandes capitales mineros, agroindustriales, energéticos, forestales y de servicios sanitarios (Correa, 2020). Tal apropiación ha generado fenómenos de desecamiento y muerte de ecosistemas locales, dificultades de los pequeños productores para acceder al recurso hídrico, procesos migratorios con el subsecuente abandono de los pequeños pueblos y problemas en la calidad del servicio a las ciudades. El caso del pequeño poblado de Quillagua en el desierto de Atacama no solo es emblemático de las consecuencias de la apropiación de las aguas y su contaminación por parte de la gran minería, también revela el conjunto de normativas y derechos vulnerados sin que exista una respuesta institucional. El testimonio de uno de los escasos 100 habitantes –de los mil que llegó a tener Quillagua– es demostrativo de las graves consecuencias sociales provocadas por el desecamiento del oasis: “Yo era agricultor. Tenía máquinas, animales y hasta gente que trabajaba para mí (...) Todo eso quedó en el pasado. Actualmente, este es un pueblo fantasma. Lo único que queda es tomar y consumir drogas”²⁰.

La mercantilización del agua constituye un caso representativo de la irracionalidad e ineficiencia del mercado como motor de crecimiento y asignador de recursos; pero también, de las complicidades tejidas entre sector privado con instituciones y autoridades de distinto signo político. Efectivamente, la amalgama entre políticas de liberalización económica y promoción al “estado mínimo” terminaron por favorecer la laxitud en la aplicación de las normas administrativas, desmonte de mecanismos para la regulación económica y alentar connivencias entre empresarios, políticos y autoridades, favoreciendo espurias prácticas sociales e institucionales. De un lado, estimulando la depredación institucional con el uso patrimonial de la ley e instituciones; al tiempo que promueve la circulación de autoridades y técnicos del sector público al privado. Por otro lado, amparando la corrupción corporativa, siendo emblemáticos los casos de colusión empresarial (cadenas de farmacias (2008) y empresas de papel higiénico (2014)); evasión de impuestos y uso de paraísos fiscales; fraudes y malversación de recurso públicos; financiamiento político ilegal; entre otros.

La enumeración de estos hechos desmitifica discursos y análisis apologéticos sobre las bondades del modelo chileno. Asimismo, revelan como el acaparamiento de oportunidades por empresarios, autoridades y políticos constituye un ejercicio colectivo de poder sobre el mercado, posibilitando

²⁰ Ver documental “Las Cruces de Quillagua” (2012), <https://vimeo.com/97678285>

adquirir ventajas, lucrar y eludir con sus responsabilidades ciudadanas. De tal forma “[se] instaló la idea que la justicia solo funciona con los pobres, pues con los ricos y conectados políticamente lo que funcionaba era el arreglo extrajudicial²¹. El veredicto de Claudio Fuentes refiere a los efectos políticos que conlleva la expansión de un sentimiento de indignación y agravio moral, pues, cuando la desigualdad es percibida como particularmente injusta, “puede contribuir a la inestabilidad social y pérdida de confianza al debilitar la legitimidad de los mecanismos de apropiación de los recursos, los sistemas que los regulan y los grupos sociales que lo controlan” (CEPAL, 2016: 15).

Cuando los estudiantes secundarios –días previos al 18 de octubre de 2019– decidieron brincar los torniquetes del tren subterráneo en protesta por lo que consideran era una injusta subida en el precio del boleto, acuñaron una consigna que sintetizaría no solo la indignación colectiva por los cobros ilegítimos, fundamentalmente planteaba el derecho a desobedecer las reglas instituidas cuando hay un uso mercantil (“lucro”) de los bienes públicos: Escrita en las paredes de Santiago apareció la palabra “evade”²².

III. Abriendo el horizonte de lo posible

Los llamados a superar el neoliberalismo y promover un cambio de Constitución Política no brotan sólo de una indignación por los agravios experimentados o por un sentimiento de injusticia a raíz de las desigualdades instituidas tras 30 años de “neoliberalismo avanzado”²³. Para entender su politización, la profundidad en el quiebre ideológico suscitado y las posibles direcciones en la que parecen ir los cambios en Chile, es menester reconocer el papel ejercido por actores sociales y políticos (tradicionales y emergentes) que operan dentro y fuera del sistema político; quienes han preservado demandas históricas, posicionado un lenguaje polí-

²¹ <https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/10/22/la-morfologia-del-estallido-social-y-la-crisis-de-democracia/>

²² <https://nacla.org/news/2020/03/03/el-metro-de-santiago-un-microcosmos-de-chile>

²³ Los llamados a cambiar la Constitución en democracia datan de 1990. A comienzos del presente siglo nace el Movimiento Asamblea Constituyente, el cual tuvo activo rol en posicionar este tópico en diversos espacios. Michelle Bachelet fue receptiva a la demanda por un cambio de Constitución en su segundo gobierno (2014-2018), para lo cual promovió un proceso constituyente con el objetivo de instituir un nuevo pacto social. Pese a la importante participación ciudadana, la convocatoria no prosperará por la debilidad política del gobierno.

tico reivindicativo, incorporado a la movilización a nuevos sectores y ofertado una agenda de país alternativa.

De un lado, tenemos la irrupción de un feminismo de masas, la más relevante expresión politizada de una novedosa diversidad social. Se agregan fuerzas políticas como el Frente Amplio (FA), manifestación electoral de un creciente malestar generacional. Del otro, organizaciones históricas como la de los estudiantes secundarios y la universitaria Confederación de Estudiante de Chile (Confech), decisivas en denunciar el carácter mercantilizado sistema educativo. Junto a estas, el Partido Comunista (PC), quien por años ha denunciado el origen ilegítimo de la constitución y la naturaleza autoritaria del régimen político.

Un análisis de la trayectoria de las organizaciones estudiantiles, por ejemplo, no solo da cuenta de las continuidades, rupturas y capacidad de adaptación de estos actores en las últimas tres décadas, su accionar colectivo constituye un barómetro adecuado para observar la recurrente conflictividad social en la cual ha estado sumido este país desde los años noventa del siglo pasado (Villalobos y Ortiz, 2019). Sobre todo, permite advertir como con cada ciclo de movilización se profundizan los cuestionamientos a las bases epistémicas del modelo neoliberal. Acontece con los estudiantes secundarios movilizados en el 2006, quienes –a decir de un grupo de investigadores– lograron articular, con su discurso y con su práctica,

una crítica radical al “modo de vida” hegemónico en la sociedad neoliberal chilena, que ellos asocian al individualismo, el consumismo, la competencia, el comportamiento acomodaticio y la falta de conciencia social y disposición a movilizarse. Como señaló un vocero nacional de los estudiantes secundarios en el 2006, “nuestra crítica (...) [es] contra los modos de relaciones humanas que existen y esa relación humana no permite un desarrollo del ser humano. Hay una limitante entre los parámetros para desarrollar tu vida y cuáles son los idearios para desarrollarlos: Nuestros padres trabajan para vivir y viven para poder trabajar y nos crían pa’ lo mismo...” (González *et al*, 2008: 43)

Al revalorizar la educación como un derecho social y cuestionar la base epistémica con la cual opera el sistema educativo, el estudiantado movilizado contribuirá a erosionar política e ideológicamente la denominada Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, uno de los pilares del neoliberalismo chileno²⁴. Por consiguien-

²⁴ La Ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), fue promulgada por Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de dejar el gobierno. Como resultado de las movilizaciones se-

te, al ocupar el espacio público como táctica de movilización y contribuir a la aparición de nuevos liderazgos políticos, las diversas protestas estudiantiles (como las secundarias del 2006 o las universitarias del 2011) conllevarán dos méritos estratégicos: agenciar y posicionar marcos valorativos alternativos al modelo de país (Álvarez, 2011) e incorporarán a nuevos y extensos sectores sociales a la movilización (Villalobos y Ortiz, 2019: 103-111).

Por otro lado, tanto el PC como el FA se destacan por promover una nueva generación de leyes sociales, coadyuvando también a desgastar epistémica, política e ideológicamente las bases del modelo económico, como también, la naturaleza conservadora de las leyes chilenas: gratuidad para la educación superior; ley n° 21030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo (ley de las Tres Causales); impuesto a la explotación de recursos de la nación (Royalty); impulso a una empresa nacional del litio; ley de Matrimonio Igualitario; proyecto de reforma constitucional para crear Renta Básica Universal; aprobación de la ley “de las 40 horas”. Las dos últimas apuntalada por la Covid 19, tal como recalca la exdiputada Camila Vallejo:

La pandemia también da cuenta de las falencias de nuestro sistema [laboral]. Por una parte, tenemos un mercado laboral que no le da cabida a algo que es fundamental, que es el cuidado de las personas (...) Por otra parte, la pandemia ha arrojado un nivel de desempleo tremendo, el desempleo estructural probablemente crezca en las próximas décadas, y es por eso que tenemos que repensar en nuestras relaciones laborales y el tiempo que los trabajadores y trabajadoras le dedican al trabajo, para justamente poder abrir más puestos de trabajo (...)

Creo que aprobar las 40 horas es una manera de responder a un grito que hace mucho tiempo está presente en los trabajadores y en las familias trabajadoras: poner en el centro el que el trabajo sirva para vivir y no se viva simplemente para trabajar²⁵.

En el caso del PC, además, por encabezar una alternativa gestión en municipios gobernados por sus militantes. Sobresale la administración de Daniel Jadue, en la deprimida comuna de Recoleta, gestión reconocida por “abaratar” el costo de la vida de sus habitantes gracias a un conjunto de iniciativas de alto impacto social: instauración de un sistema de farmacias que venden medicamentos e instrumen-

cundarias de 2006 fue derogada bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Sustituida por la Ley General de Educación (LGE), esta última no modifica la naturaleza mercantil del sistema educativo.

²⁵ <https://radio.uchile.cl/2020/12/13/camila-vallejo-y-40-horas-es-una-politica-que-ayudara-a-la-generacion-de-empleo/>

tos médicos a precio de fábrica (disminuyendo entre un 50 y 90% los precios fijados en el mercado)²⁶; fundación de una editorial y el establecimiento de una “librería popular” (en Chile 294 comunas –de las 346– carecen de una librería, lo que equivale al 85% del territorio); apertura de una “Universidad Abierta” –inspirada en el modelo educativo de las alcaldías alemanas– la cual tiene por objetivo “democratizar el acceso al conocimiento”; construcción y administración de viviendas sociales –política novedosa en Chile– cuya finalidad es establecer “arriendo a precio justo”, más precisamente, donde el contrato de renta no supere el 25% del ingreso de la familia o persona vulnerable. Propuesta atractiva si consideramos que quienes conforman el 20% más pobre de la población destinaba en el 2017 más del 50% de sus ingresos para este fin²⁷.

En un país donde el 90% del mercado farmacéutico se encuentra monopolizado por 3 grandes grupos, los beneficios que entregan estas iniciativas son palpables. Los testimonios de quienes adquieren medicamentos en Recoleta son representativos de cómo estas medidas tienen el efecto de “estirar” los ingresos de la población:

“Las compañías han sacado enormes beneficios de las enfermedades de la tercera edad”, dijo German Vergara, un cliente. “Mi madre necesita una gran cantidad de medicamentos, al igual que cualquier persona de su edad: No puede caminar, tiene problemas con sus rodillas, sus huesos, su vista y tiene alergias. Ahora, al menos, cubrimos los costos con su pensión”
Detrás de él estaba María Cornejo (...), quien compraba medicamentos para sus padres, gafas para su marido y gotas para los ojos de ella.
“El doctor me dijo que tengo que usar las gotas seis veces al día, pero cuestan casi [30 dólares] en las farmacias normales y cada botella sólo dura un mes”, dijo. “Terminé usándolas menos veces al día para que durarán más”. Ahora, ella los compra por [14 dólares] ²⁸.

²⁶ En funcionamiento desde el 2015, este sistema convierte a las municipalidades en dispensadores de medicamentos gracias a la intermediación de la [Central Nacional de Abastecimiento \(Cenabast\)](#), organismo estatal que compra al por mayor productos elaborados por las farmacéuticas. Mientras los hospitales y consultorios del Estado entregan los medicamentos de forma gratuita, las municipalidades venden a precio de costo <http://www.clinicasdechile.cl/noticias/farmacias-comunales-ya-son-154-y-comercializan-mas-de-9-mil-millones/>

²⁷ <https://www.latercera.com/noticia/familias-vulnerables-gastan-50-ingresos-arriendo/>

²⁸ <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-13/a-communist-has-sparked-a-cheap-medicine-frenzy-all-across-chile>

Las iniciativas emanadas desde Recoleta no solo se circunscriben en ser replicadas por cerca de 100 administraciones locales, sus repercusiones estriban – esencialmente– en el impacto ideológico que conllevan: Sea por socavar los marcos legales que regulan Estado subsidiario –los cuales restringen las atribuciones económicas y empresariales de las comunas– utilizando resquicios legales que habiliten “saltar la ley cumpliendo el espíritu de la ley”; Sea por develar la naturaleza especulativa, lucrativa y segmentada con que opera la “ciudad neoliberal”. Esto es, la constitución de espacios sociales estratificados y diferenciados (barrios, arquitectura y servicios con diversas calidades) destinados a segregar a la población según sus ingresos. Factores como los reseñados contribuyen a explicar porque la subida del pasaje del Metro fue un estímulo “para encender la mella que inició la crítica integral del sistema [de transporte] (...) fue el conector material y simbólico que articuló y luego sintetizó las diferentes capas de un descontento social acumulado por largos años (Urzúa y Calderón, 2020: 291).

En efecto, la intensiva protesta en Santiago está íntimamente vinculada al carácter clasista del modelo de ciudad concebido por los planificadores urbanos de la dictadura a fines de los años setenta, cuando se puso en movimiento un proyecto de remodelación urbanístico para la zona oriente de la capital (Leyton, 2020). Datos de 2011 revelaban que el ingreso per cápita por habitante de la exclusiva comuna de Vitacura fue de 1,143 dólares mensuales –el más elevado del país–, cifra 10 veces superior al ingreso de los habitantes de las comunas que integran el decil más pobre²⁹. Tal asimetría se traduce en niveles educativos más altos, acceso a servicios de calidad y áreas verdes para el disfrute. Igualmente, contribuye a conformar un *universo social paralelo*, pues la vida de quienes habitan esta zona transcurre sin conocer ni interactuar con las personas de otras zonas de la ciudad; contribuyendo a moldear un enfoque cognitivo distorsionador de la realidad nacional. Una declaración de Sebastián Piñera –formulada con 10 días de antelación al estallido– es emblemática del grado de desconexión alcanzado por las élites que viven en el oriente de Santiago. Hablando sobre los problemas políticos en el hemisferio –en esos días había estallado una revuelta popular en Ecuador en contra del “paquetazo económico” promulgado por Lenin Moreno– el presidente chileno aseveró: “en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es *un verdadero oasis* con una democracia estable (...) Mientras más veo las crisis, más tenemos que apreciar nuestro país”.

La diferenciación socioespacial nacida con las políticas mercantiles, por lo tanto, terminaron por configurar una “violencia simbólica”, pero en un sentido diferente

²⁹ http://www.ochisap.cl/images/SocioEconomico_SaludComunas.pdf

a lo formulado por Pierre Bourdieu; pues las relaciones sociales, valores, noción de estatus, posición social y categorías cognitivas promovidas por los formuladores de este modelo, acabaron por transformarse en parámetros capaces de volver insoportables las abismantes divisiones de clase y espaciales instituidas. Una frase brotada del ingenio popular, al día siguiente del plebiscito de 2020, condensa esta percepción social: “no son 30 años, son 3 comunas”. Ante esta segregación espacial, concentración de vulnerabilidades y débiles políticas públicas, el edil comunista sugiere: “los gobiernos locales tienen que tomar protagonismo en todos aquellos servicios donde el Estado no opera”³⁰. En este sentido, las políticas emanada desde Recoleta han tenido el impacto pedagógico de: a) erosionar ideológicamente al neoliberalismo al esclarecer el carácter selectivo y restringido con que operan el Estado subsidiario y el libre mercado; b) politizar las desigualdades espaciales y redefinir la noción de ciudadanía al recuperar su dimensión social; y c) agenciar la necesidad de organizar una ciudad “a escala humana”, es decir, posibilitar al habitante de un barrio tener al alcance de una caminata todos los servicios, “una ciudad de 15 minutos”.

No soy partidario de mejorar la “accesibilidad urbana”. Más bien y soy partidario de “intervenir el territorio”, de forma de distribuir de mejor manera bienes, servicios y productos que la gente requiere para que estén a distancia de una caminata. Ese es un enfoque completamente distinto, que tiene de trasfondo ideológico la ciudad de los “15 minutos” (...)

Antes de la Óptica Popular en Recoleta no había ninguna óptica, por lo tanto, para comprarte un lente tenías que viajar al menos 4 veces hacia el centro [de Santiago]. Teniendo la óptica aquí, eliminamos 4 viajes al centro y, por lo tanto, descongestionamos y descontaminamos (...)

[Además,] si cada barrio tuviera un liceo o una escuela a no más de 15 minutos y todos los estudiantes estudiaran en los colegios y liceos de su barrio –si entregaran una buena educación– te ahorrarías el 22% de los viajes al día. Y si a esto le sumaras buenos consultorios en los barrios o, por ejemplo, un programa como el de Salud en el Barrio de Recoleta, que atiende la salud primaria no invasiva en las juntas de vecino (...) podrías restarle el 12% siguiente de los viajes que se hacen diariamente en la ciudad, que hoy deben andar cerca de los 20 millones de viajes al día.

Piensa tú, en la misma ciudad y con estas dos intervenciones en el territorio, tu podrías bajar en un 34%. Es decir, de los 20 millones tu pasarías solo a 14 millones de viajes³¹.

³⁰ https://elpais.com/elpais/2018/03/16/planeta_futuro/1521197151_526722.html

³¹ https://www.youtube.com/watch?v=wvt5m7H_GhQ&ab_channel=DanielJadue

Sin embargo, para entender la masiva participación alcanzada por el estallido, es menester situar el protagonismo adquirido por las mujeres. La centralidad adquirida confirma la irrupción de un “feminismo de masas” como sujeto político en Chile. Acontecimiento emblemático fue la marcha del 8 de marzo de 2018, cuando cientos de miles ocuparon las calles para adherirse a una convocatoria realizada por las estudiantes universitarias. Si bien las demandas referían al sexismo en la educación, violencia de género y acoso sexual en las universidades, lo distintivo fue la capacidad de interpelar a todas las mujeres del país al situar al patriarcado como matriz de las desigualdades que las afectan.

La denominada “tercera ola feminista” vincula este sistema con dos problemáticas: de un lado, una institucionalidad que subordina, violenta e invisibiliza a las mujeres; del otro, un régimen de trabajo que afecta con particular intensidad a la fuerza laboral femenina. Al calificar a este sistema como un fenómeno estructural, los colectivos feministas posibilitaron develar una omisión central del proceso de democratización chileno, al tiempo que situaron la desigualdad entre géneros en el centro de las políticas de mercado. Fruto de los esfuerzos de diversas organizaciones por visibilizar agravios históricos, quebrar silencios y posicionar demandas, la creciente incidencia de la agenda feminista y de los movimientos por la diversidad sexual dan cuenta de los cambios sociales y culturales en un país caracterizado por su conservadorismo valórico. Ilustrativo de esta problemática fue la toma de 15 universidades por colectivos femeninos en el 2018, las cuales contribuirán a develar el fetichismo de los estudios superiores y del mundo académico; esto es, las universidades no constituyen espacios libres de violencia y el capital cultural no se traduce en igualdad de trato, reconocimiento profesional y salarios equitativos (Pérez, 2019: 224-225).

Sin embargo, para el advenimiento de esta nueva *ola*, no solo incide un marco global para la acción colectiva (las marchas por “la legalización del aborto en todas las causales” en Argentina o el movimiento “Me Too” de Estados Unidos), también importa la ventana de oportunidades políticas que posibilita los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, y la frustración que produce la gestión en materia de las mismas administraciones. En efecto, pese a ciertos avances en el reconocimiento como sujetos de derechos (despenalización de la sodomía, leyes de divorcio y en contra de la violencia doméstica), creación de un Ministerio de la Mujer en el 2015 y la promoción de un proyecto de ley para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (ley de Las Tres Causales, 2017); la ausencia de progresos en temas como la libertad de decisión sobre los cuerpos, derechos sexuales y reproductivos, la renuncia a debatir una legislación que garantice el aborto, o el freno a una reforma electoral que sancione

la paridad de género, contribuyeron a generar cierto desencanto entre las feministas, en especial con el primer gobierno de Michelle Bachelet.

La otra omisión clave –escriben Silvia Lamadrid y Alexandra Benitt citando a María Matamala– es la del trabajo no remunerado; el interés se centró en el trabajo que se transa en el mercado, validando la jornada parcial de las mujeres y su responsabilidad respecto al cuidado de los hijos, reforzando “el rol tradicional de las mujeres como responsables exclusivas del trabajo doméstico, a pesar de su incorporación al mercado laboral” (Lamadrid y Bennit, 2019: 4-5).

El entronque entre los diversos feminismos y la revuelta social, por consiguiente, germina de vincular las desventajosas condiciones en la que se hallan sumidas el grueso de las mujeres en el libre mercado y relacionarlas con la violencia estructural patriarcal. De esta manera, la politización de miles de mujeres desde el feminismo posibilitó una comprensión más global de las injusticias que padecen, esto es, “el carácter cotidiano y arraigado de las violencias; desde las brechas salariales (...) [a] las interminables cifras de feminicidio” (Follegati, 2020: 7). Asimismo, se inscribe dentro de un proceso global de cuestionamiento a diversas instituciones consideradas heteronormadas (iglesias, tribunales de justicia, policías), caracterizadas por su conservadurismo valórico y prácticas represivas. Los casos de pederastia en las iglesias, la desatención de los tribunales al feminicidio y la violencia policial contra integrantes de la comunidad LGTBQ, constata el autoritarismo y los problemas de adaptación de estas instituciones; circunstancia que abona a la creciente disputa del espacio público y el uso de formas de protesta cada vez más irreverentes y beligerantes (Marcha del Orgullo Gay y quema de templos católicos). Más que plantear un problema de “modernización asincrónica”, la conflictiva interacción entre feminismos, movimientos por la diversidad sexual, mercados e instituciones revela el carácter conservador del sistema político. Asimismo, al exhibir la desconexión de las instituciones con las nuevas pautas sociales, estas organizaciones nutrirán a la movilización social con nuevos contingentes, profundizando la crisis de legitimidad del neoliberalismo a partir de impugnar los marcos valóricos y culturales que lo sostienen.

En consecuencia, las iniciativas legislativas, el activismo social y las políticas municipales posibilitaron abrir “el horizonte de lo posible”. No solo contribuyeron a erosionar concepto de ciudad neoliberal y desmitificar el paradigma de economía y sociedad de mercados instituidos, también conllevaron la politización de las desigualdades sociales, espaciales y de género, impugnando el concepto de ciudadanía imperante al desnudar su mero significado abstracto. Por lo tanto, favorecieron a la configuración de un lenguaje y programa reivindicativos, al introducir

–en el debate público como en el campo político– nuevas y viejas categorías políticas y sociales. De un lado, al reposicionar en el imaginario el rol social del Estado y el “derecho a tener derechos”; del otro, ampliar el concepto de ciudadanía prevaleciente al incorporar un conjunto de derechos de tercera generación: autonomía, diversidad, “a la ciudad”, territoriales, género, ambientales o culturales. En términos más generales: el derecho a la dignidad humana. Por algo el epicentro geográfico de las manifestaciones (Plaza Baquedano en Santiago) fue bautizado por la población movilizadora con el nombre de “Plaza de la Dignidad”.

IV. Limitantes y restricciones ideológicas

Sin embargo, aquello que fuera interpretado como un nuevo amanecer popular (“Chile despertó”), también mostrará tensiones, claroscuros y contradicciones. Al tiempo de constituir un fenómeno transversal y movilizador, el estallido se desplegaba invertebrado e indefinido políticamente, constancia de la desintegración del tejido social tras décadas de neoliberalismo. En este sentido, otras expresiones de las protestas fueron narrativas que destilaban frustración, rabia y odio, exteriorizadas en violencia anómica. Ellas cruzan diversas sensibilidades sociales. Desde estudiantes a profesionales, informales a obreros, lumpen proletarios a trabajadores por cuenta propia, desempleados a jubilados. Tienen por común denominador la antipolítica, antipartidismo extremo, resentimiento acumulado, anhelo por escapar de un presente insoportable y, sobre todo, temor a un futuro ominoso.

Comentarios vertidos en redes sociales permiten advertir cómo significativos sectores de la población –a la par de clamar por el término de la corrupción, fin de las deudas y un alto a las arbitrariedades del mercado– exigen la expulsión de inmigrantes, desaparición de los partidos políticos y la clausura del congreso. La respuesta dada por un adulto mayor a la televisión chilena, a 3 días de iniciadas las protestas de 2019, grafica esta problemática: ante la pregunta de por qué se estaba manifestando –palabras más, palabras menos– señaló: “Estamos cansados de tanta injusticia, incompetencia del gobierno, costo de la vida, politiquería, deudas”, y añade: “porque no quiero que mis nietos tengan que sufrir lo que hoy estamos viviendo. Por eso estoy acá, tal como estuve en la calle contra [Salvador] Allende”. Las inquietudes de este entrevistado, curiosamente, confirman un axioma político de Walter Benjamin: frente la dislocada dinámica que adquiere la modernidad capitalista, la revolución –en este caso el estallido– hay que entenderla como un “freno de emergencia” (Mate, 2006).

Esta contradictoria situación recuerda que las dinámicas sociales no son lineales. Esto es, la extensa movilización acaecida a partir el 18 de octubre de 2019 no comportaba la maduración de una subjetividad capaz de superar las lógicas mercantiles que priman en importantes segmentos sociales (emprendimiento, esfuerzo personal, propiedad privada, legitimización de las desigualdades, etc.); igualmente, confirma el peso de los valores morales y bienes culturales, claves a la hora de discernir políticamente. Además de la desconfianza hacia partidos e instituciones, manifiesta las diversas velocidades y racionalidades que operan en la población a la hora de procesar descontentos, deseos, cambios y ansiedades. De ahí que algunos que votaran en contra de cualquiera de las propuestas constitucionales reafirmara su malestar y cierto sentido de clase: “[El] pobre va a ser más pobre y el rico más rico, hagan la Constitución como la hagan”³².

Ambos testimonios tienen mucho en común con el clima social que François Dubet observa para las sociedades europeas posindustriales. Efectivamente, la atmósfera que envuelve a vastos sectores chilenos calza con lo que el sociólogo francés denomina “la época de las pasiones tristes”; esto es, cuando el régimen de desigualdades de posiciones (que entregaba identidad y pertenencia colectiva a las clases sociales) da paso a un ordenamiento signado por la fragmentación social y el resentimiento individual. Para este autor, la expansión del trabajo precarizado, la diversificación de sistemas productivos, las nuevas formas de gerenciamiento, florecimiento del trabajo por cuenta propia (emprendimiento) y un significativo acceso al consumo, no solo se traducen en acceso diferenciado a empleos, bienes, servicios, barrios y colegios, fundamentalmente tienen el efecto de incrementar las pautas de individualización, desestructurar las trayectorias personales y disolver los marcos de referencia tradicionales que asignaban sentido, explicación y responsabilidad a la experiencia social de la desigualdad. Al desdibujarse las causales estructurales y diluirse las responsabilidades sociales, la frustración y el sentimiento de injusticia pueden transmutar en humillación, vergüenza e ira, encausando la indignación acumulada no tanto en contra de un sistema de explotación abstracto, sino, preferentemente, hacia múltiples (y muchas veces pequeñas) desigualdades que cruzan cotidianamente a los individuos (color de piel, género, etnia, barrio donde se vive, derechos accedidos, etc.). Desigualdades representadas, por lo general, en un ‘*otro cercano*’, percibido como oportunista, privilegiado o foráneo.

³² <https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2022/09/16/chile-que-hay-detras-del-rechazo-a-la-constitucion-en-la-comuna-emblema-de-la-megasequia.html>

La irrupción de un “régimen de desigualdades múltiples” (cuando la movilidad social radica en los méritos y no en el acceso a derechos) tiene por atributo distintivo provocar, de un lado, el deseo de igualdad y exacerbar, del otro, el temor a la diferencia social. Por lo tanto, “aunque se reduzcan las desigualdades, éstas se viven más dolorosamente”. De tal forma la vida social es percibida como una experiencia individual, “una puesta en entredicho del valor propio”. Por consiguiente, quienes son trabajadores precarizados, viven en barrios periféricos o resienten estudiar en colegios de segunda categoría, tienden a percibirse como excluidos, marginados o *perdedores*, “[son] *underclass*. No son tanto explotados como relegados” (Dubet, 2021: 14-15) De tal forma, la distancia entre las aspiraciones individuales y los anhelos colectivos puede conllevar:

Abrir las puertas al resentimiento, las frustraciones, a veces el odio a los demás, para evitar el desprecio de uno mismo. Genera raptos de indignación, pero, por el momento, estas indignaciones no se transforman en movimientos sociales, programas políticos ni lecturas razonadas de la vida social. [Sin embargo,] establecen una economía moral en la cual el rechazo de los otros y la indignación devuelven al ciudadano desdichado su valor y dignidad (Dubet, 2021: 28-29)³³.

Los sombríos señalamientos de Lucy Oporto van en esa dirección: los orígenes inconscientes del fascismo. Para esta filósofa, 2019 en ningún caso constituye un acto democrático; por el contrario, personificaría los peores temores de Pier Paolo Pasolini: “las siniestras apetencias de la sociedad de consumo”. Las conjeturas de Oporto Valencia apuntan a las peligrosas implicancias sociológicas y culturales que trajo optar por un sistema hiper mercantilizado; el cual –por medio de la precariedad laboral, consumo insustancial y el endeudamiento crónico– condujo a la aparición de un individualismo anómico y autodestructivo. De forma que la violencia acaecida en octubre de ese año exteriorizaría los ímpetus más negativos labrados en una sociedad hedonista e insatisfecha, caída en la deshumanización, desarraigo y desorientación.

Con ocasión de la crisis social –escribe– ha venido dándose un extraño fenómeno: una incapacidad transversal, entre representantes de visiones alternativas (...) de aceptar el peso de la realidad de gravísimos hechos (...) Esto es, la destrucción sistemática de infraestructura pública y privada,

³³ Un artículo publicado por CEPAL coincide con los diagnósticos del sociólogo galo: “A nivel subjetivo, la precariedad laboral se manifiesta en la aparición de fenómenos de individualidad, riesgo, incertidumbre (ausencia de certezas) e inseguridad (...) [gestando] una nueva “cuestión social del trabajo”” (Blanco y Julián-Vejar, 2019: 101).

empezamos por el sabotaje y destrucción del metro de Santiago y, después, destrozos, saqueos e incendios de supermercados, farmacias, microbuses, peajes, tiendas, hoteles, bancos, municipalidades, iglesias, edificios patrimoniales y monumentos históricos (...)

En Santiago (...) la antigua Parroquia de la Asunción fue saqueada, siendo utilizadas sus bancas, confesionarios, imágenes y esculturas para levantar una barricada. Al igual que es junio de 2016, en la Iglesia de la Gratitude Nacional, una imagen de Cristo fue destruida (...), en otro horror satánico. Que trasunta una forma de extinción simbólica³⁴

Aun cuando es cuestionable que los millones que protestaran sean expresión del “lumpenfascismo” como sugiera la autora (sobre todo si consideramos que se movilizaron pacífica y creativamente), no es menos cierto que la imagen que entrega otorga elementos para entender porque una voz de derecha pronosticara un “rebote autoritario”³⁵. Bajo esta mirada, el escenario de desborde social habría dislocado rutinas, infringido normas, transgredido sentidos comunes y desacralizado símbolos religiosos, nacionales y estatales (zozobras amplificadas por los impactos psicosociales de la pandemia, incremento de la criminalidad, violencia derivada del narcotráfico y la entrada masiva de migrantes). Esta conflictiva dinámica callejera, por lo tanto, está detrás de las angustias, ansiedades y temores que progresivamente alcanzó a numerosos segmentos de chilenas y chilenos a lo largo del 2020; sobre todo si acontece tras décadas de relativo consenso social y estabilidad política e institucional. Del mismo modo, contribuye a explicar porque perciben que su país se halla sumido en una peligrosa fractura ideológica y cultural, exteriorizada en violencia física y simbólica; representada, paradigmáticamente, con la quema y posterior remoción de una estatua situada en el núcleo de las protestas en Santiago. Y aun cuando las movilizaciones carecieron de simbología que aludiera a orgánicas partidistas (los marcos de referencia eran estéticos antes que ideológicos), a ojos de sectores pudientes y de derechas la narrativa callejera parecía estar hegemonizada con discursos, valores y programas identificados con las izquierdas. Por estos motivos, especulaban con temor:

Vendrán políticas de discriminación “positiva” (...) Políticas basadas en tu origen étnico, sexo u orientación sexual. Políticas para minorías, causando molestia en que sea eso y no el mérito lo que ayude a progresar (...) Dado esto, prefiero [mantener la constitución] como está. Considerando que en

³⁴ <http://letras.mysite.com/lopo171119.html>

³⁵ <https://www.latercera.com/opinion/noticia/estallido-y-fiesta/978476/>

esta condición hemos conseguido una sólida economía, movilidad social y libertad. Algo que está en riesgo con los cambios que se plantean³⁶.

En efecto, la distribución geográfica del voto en las diversas consultas exhibe la brecha socioespacial y cognitiva que 35 años de neoliberalismo han producido entre las clases sociales. El abrumador voto emitido en contra de un cambio constitucional en tres comunas de Santiago (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea), testifica la brutal desconexión de los sectores más pudientes con los problemas padecidos por el resto del país. Por consiguiente, la lucha de clases adquiere visibilidad, pues, ante la centralidad y legitimidad que adquieren discursos y demandas sociales que claman por la redistribución de la riqueza, crecientes contingentes de la población asume esta categoría como herramienta de análisis y diferenciación. El retorno a un campo social signado por la defensa de los privilegios se percibe entre los motivos esgrimidos por la mayoría de los habitantes de estos municipios: “En estas comunas –señala BBC en el 2019– existe un miedo al discurso de la refundación, a ‘la pérdida de privilegios y a la incertidumbre’ (...) lo que ve [este] entorno es preocupación porque haya cambios en el régimen de ‘la propiedad privada y el sistema impositivo’”³⁷.

Tales señalamientos denotan la quiebra en las certezas políticas, valores consagrados y relaciones sociales instituidas. Igualmente, insinúan que el antagonismo entre “Estado clientelista” vs “consumidores/emprendedores” promovido por la neoliberal “revolución silenciosa”, parece direccionarse hacia una frontera política marcada por la dicotomización del espacio social. Se percibe con la reemergencia de discursos clasistas, imaginarios anticomunistas y fobias sociales ante el temor –en ciertos núcleos de la población– al advenimiento de una nueva “Unidad Popular”.

Que la propia modernización neoliberal sea responsable de esta situación es reafirmado por Alexis López Tapia (2013), histórico militante de la vertiente más clásica del fascismo criollo. Para López Tapia, el proyecto mercantil contribuye a que poderosas tendencias globales tengan un efecto corrosivo en Chile. Además de atacar las bases materiales de la vida social, sus principales consecuencias se observan en el plano sociocultural (familia, nación y el tejido social), dando pie a un estado generalizado de incertidumbre, malestar e insatisfacción. Para la concreción de este funesto escenario habrían colaborado los gobiernos de la Concertación y “la derecha neoliberal, antinacional y globalista”, quienes establecieron

³⁶ <https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2020/10/22/las-7-razones-mas-citadas-para-votar-apruebo-o-rechazo-y-el-unico-punto-de-consenso.shtml>

³⁷ <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54698406>, negritas en original.

“certera y sistemáticamente las condiciones de ‘ruptura’”, viabilizado la aparición “[de las] nuevas máquinas de guerra revolucionarias”.

Los ejes de este ataque se han dado precisamente desde dos sectores que constituyen fuerzas de choque fundamentales del deconstruccionismo: el feminismo y el movimiento homosexual. Desde el primero, a través de una ruptura del rol femenino tradicional –alimentado directamente por el modelo neoliberal dominante–, que cuestiona, deconstruye, su multiplicidad como mujer, esposa y madre, y la reduce a mero “individuo de género femenino”, esto es, un ente desarraigado de la vida familiar y comunitaria, básicamente egoísta y condicionado en su propio valer de acuerdo al criterio del mercado (López Tapia, 2013: 13-15)

Desde esta perspectiva, los feminismos y la denominada “ideología de género” personifican una ola *nihilista*. Por nihilismo, entendemos el rol disolvente que cumplen doctrinas e imaginarios sociales con capacidad de desmontar los valores consagrados. Al cuestionar cánones enraizados (patriarcado) e impugnar estereotipos instituidos (homosexualidad), “el impacto herético” propiciado por organizaciones promotoras de la diversidad sexual y de la emancipación de la mujer, habría conllevado en integrantes de las más diversas confesiones religiosas y personas defensoras de la familia tradicional a experimentar un estado de inquietud, desorientación y miedos, “que aparece –sentencia– una vez que fallan las referencias tradicionales” (Volpi, 2007: 14).

Modernización endeble –se infiere– por una descomposición de las instituciones, inconsistencia de estatus, pasiones reprimidas y profundos desarraigos sociales. Ominoso escenario que es condición de posibilidad –escribiría Michel Dobry– “[para una] regresión hacia los *habitus*”. Esto es, la necesidad de recuperar rutinas y certezas “en los precisos momentos en los que el mundo social parece derrumbarse” (Dobry, 1988: 219). “Será por lo que uno está acostumbrado, por miedo –señaló un habitante de una comuna popular– Yo creo que gran parte de la gente votó por miedo a no atreverse a algo nuevo y seguir con lo que se viene de hace muchos años atrás”³⁸. Hallamos un tópico característico en sectores vulnerables, tradicionalistas y conservadores en tiempos de crisis: cuando la modernidad/modernización es padecida como un estado de decadencia, inseguridades y desencanto (Núñez y Palomé: 2022). Así lo piensa una votante que optó, en el primer plebiscito de salida, por el “rechazo”: “Estoy apoyando al Presidente [Ga-

³⁸ <https://www.ciperchile.cl/2022/09/07/recoleta-no-estoy-bien-informada-y-ante-eso-preferi-rechazo/>

briel Boric]. Sin embargo, yo por mi tema cristiano no podía votar Apruebo, por un tema de principios cristianos”³⁹.

Ambas afirmaciones facultan avizorar tensiones y dilemas brotados con el “estallido social”. Como señalamos, frente a un escenario político signado por la fluidez y violencia, la capacidad para procesar una súbita alteración de los hábitos, rutinas y reglas se pone a prueba. Del mismo modo, traslucen las motivaciones que activan fobias, recelos y temores cuando la masiva movilización cuestiona valores y sentidos comunes arraigados. Justamente, entre las razones esgrimidas por la mayoría de los sectores populares a la hora de rechazar la primera propuesta constitucional se halla que la Campaña por el Apruebo del 2022 no priorizara contenidos económicos y laborales, ejes temáticos que viabilizaron la convergencia y movilización de millones en el 2019. Por el contrario, el acento en una agenda “liberal-social” promovida por colectivos LGTB y del movimiento feminista o el deseo de direccionar el debate hacia la pertinencia de constituir un Estado Plurinacional (en Chile habitan 10 grupos originarios), además de contribuir a generar desconfianza, frustración y desorientación política, también explica la convergencia electoral con las clases más pudientes, al activar prejuicios y recelos compartidos: temor a una nueva agenda valórica, institucionalizar nuevos grupos de privilegiados, sancionar la posible división política del país.

Finalmente, asunto clave, constata la desconexión entre una generación de jóvenes educados, cosmopolitas y politizados con los padecimientos socioeconómicos de las mayorías populares. En opinión de José Gabriel Palma, el abrumador voto popular en contra de la propuesta constitucional de 2022 revela las dificultades que tiene la actual generación de jóvenes en el gobierno (defensores del medioambiente, liberales en lo valórico, promotores del veganismo y que ven a Finlandia como modelo a seguir) para comprender la falta de oportunidades, urgencias materiales, problemas de pobreza, barreras sociales y humillaciones cotidianas soportadas por sus pares populares. Por esta razón, arguye, Chile habría desembocado “[en] una especie de esquizofrenia ideológica”, esto es:

Los jóvenes están mucho más interesados en los temas de derechos personales, de derechos reproductivos, de la diversidad sexual, de la inmigración y del medioambiente que de las cosas que le preocupan al mundo popular, como es su compleja subsistencia. Son dos grupos aliados naturales, pero con urgencias muy distintas, y ellas se divorciaron completamente. Ade-

³⁹ <https://www.ciperchile.cl/2022/09/07/quilicura-estoy-apoyando-al-presidente-sin-embargo-por-mi-tema-cristiano-no-podia-votar-apruebo/>

más, mucho del mundo popular, ya sea por razones religiosas o culturales, está incluso en contra de algunos de esos derechos personales, que es el centro de la ideología de este grupo joven.

La Constitución tenía muy poco que ofrecer a quienes tienen que luchar día a día por la subsistencia⁴⁰.

Las apreciaciones de este reconocido economista corroboran dos aspectos interrelacionados: la importancia de las bases materiales para el estallido social y que la mayoría de quienes votaran en contra de la propuesta en el 2022 no desaprobaban en bloque la Constitución ofertada⁴¹. Como estipulara una persona: “Si bien se quería sacar la Constitución del 80, y eso lo entiendo completamente, no entendía mucho que metieran el tema de los pueblos originarios”⁴². En efecto, al contrastar los estudios de opinión pública con la racionalidad de los electores en ambos plebiscitos de salida cierta ambivalencia emerge. Si bien un 62% de la población rechazó la propuesta de cambio constitucional de 2022, las encuestas publicadas en los meses siguientes arrojan que un 64% de los consultados apoyaba disminuir a 40 horas la jornada de trabajo, 77% dijo respaldar un impuesto a los altos ingresos y un 89% reformar el sistema de salud⁴³. En el caso de las divulgadas tras la consulta de 2023, donde un 56% impugnó la segunda propuesta de nueva Constitución, estas informan que un 63% está de acuerdo con la creación de una AFP Estatal, al tiempo que otro 73% señaló respalda la creación de una Empresa Nacional del Litio⁴⁴.

Los datos recabados sugieren que el voto popular está signado por la creciente tensión entre antiguos y nuevos imaginarios sociales, reflejo de la progresiva disputa ideológica que viene instalándose en este país. Problemática expresada

⁴⁰ “José Gabriel Palma: Esta generación en el poder no tiene la capacidad de entender la urgencia del problema de pobreza”, *La Tercera*, 8 de octubre de 2022.

⁴¹ Factor clave para entender la magnitud del triunfo del Rechazo fue decretar el voto obligatorio. Esta medida tuvo el efecto de movilizar a sectores populares caracterizados por su apatía electoral. Durante el plebiscito del 2020 (con voto voluntario y convocado para elegir a los 155 convencionales constituyentes) la participación electoral sumó 7,574 millones de personas (50.98% del padrón electoral); mientras que en el plebiscito de salida de 2022 (con voto obligatorio), la participación se empujó a 13,028 millones (85.8% del padrón electoral). Si en el 2020 el Apruebo obtuvo 5,899 millones de votos (78.31%) y el Rechazo recibió 1,634 millones (21.69%); en el 2022 el primero recibió 4,859 millones (38.14%), al tiempo que el Rechazo logró sumar 7,891 millones (61.86%). Un cálculo simple indicaría que, de los 5,454 millones de nuevos votantes, 5,217 millones habrían votado Rechazo. Un sorprendente 95.6%.

⁴² <https://www.ciperchile.cl/2022/09/07/san-bernardo-si-bien-se-queria-sacar-la-constitucion-del-80-no-entendia-que-metieran-el-tema-de-los-pueblos-originarios/>

⁴³ <https://cadem.cl/wp-content/uploads/2023/01/Track-PP-471-Enero-S3-VF.pdf>

⁴⁴ <https://www.emol.com/noticias/Economia/2023/04/30/1093749/cadem-75-apoya-publicoprivado-litio.html>.

con el mayoritario repudio de estos mismos sectores a la regresiva iniciativa constitucional de diciembre de 2023: sea por desvanecer la agenda económica, social y laboral de cambios, sea por centrarse en temas securitarios, simbólicos y valóricos conservadores⁴⁵. En cualquier caso, por la fatiga y hastío ante un proceso considerado lejano y elitista: “Ya llevamos demasiado tiempo alargando este proceso –opinó una entrevistada de BBC– perdiendo tiempo en elecciones y con una clase política inepta e incapaz de ponerse de acuerdo”⁴⁶. Aseveración que valida las apreciaciones de Alberto Mayol, entre otras, interpretar que ambos resultados plebiscitarios constituyen “otro triunfo del malestar social”⁴⁷.

Conclusiones

Para comprender las motivaciones del inesperado resultado del plebiscito de 2022 o porqué un 56% del electorado se volcó en contra de una constitución conservadora en el 2023, es pertinente recordar las raíces de ambos procesos Constituyentes. Al desmenuzar los resultados que inclinaron a un 78.26% de la población el apoyar un cambio de Constitución en octubre de 2020, resalta –en primer término– la correlación entre el voto emitido y los agravios padecidos tras 30 años de neoliberalismo. Se observa con el aplastante apoyo obtenido por el “apruebo” en aquellas comunas donde se hayan las denominadas “zonas de sacrificio” o que experimentan graves dificultades socioeconómicas, todas con porcentajes de aprobación por arriba del promedio nacional. La mayoría de estos municipios se localizan en las regiones del norte de Chile, caracterizadas por un clima árido y semi árido, alta concentración de industria minera y escasez de agua: Freirina (91.8 %), María Elena (91.2%), Petorca (90.0%), Tocopilla (90.0%), por nombrar algunas. Las palabras de Lorena Donaire, activista defensora del agua en Petorca, son representativas de los diversos procesos de politización local acaecidos:

Estuve en tres comunidades donde sus pozos quedaron completamente secos, a esa gente la vi motivada votando el domingo principalmente porque quieren un cambio y hacer una demostración a la clase política. La gente

⁴⁵ A pesar que un 44% optó por suscribir la conservadora iniciativa constitucional, la encuesta *Cadem* de junio de 2024 informa que el apoyo al aborto en tres causales alcanzó 79% de la población, mientras que un 77% es favorable a reconocer el matrimonio entre parejas homosexuales <https://cadem.cl/estudios/63-esta-de-acuerdo-con-la-creacion-de-una-afp-estatal-que-compita-con-las-actuales-afps-privadas/>

⁴⁶ <https://www.bbc.com/mundo/articles/cner24k0j9lo>

⁴⁷ https://www.youtube.com/watch?v=mdgPVpCjBUI&ab_channel=LaCosaNostra

ahora quiere empezar a pensar en los constituyentes, que tiene que ser del territorio, que entienda las carencias que tenemos ⁴⁸.

El creciente interés por establecer nuevas pautas en términos de “visión de país” no surge en el vacío. Resulta del trabajo militante y del activismo social de nuevos y tradicionales actores, claves en apuntalar algunas de las condiciones de posibilidad para el estallido. Rol relevante en concientizar a crecientes sectores –pero también generar resistencias, fobias y temores– lo tienen las organizaciones medioambientales y colectivos feministas. Las primeras no solo hacen hincapié en la conservación del planeta, también promueven una agenda distributiva de la riqueza y objetar los derechos de propiedad (Garrido, 2015: 58). Los segundos por “[sumar] una nueva capa de análisis en torno a las desigualdades existentes en uno de los países más desiguales del mundo” y establecer una relación mutua entre neoliberalismo, extractivismo y patriarcado (Santos, 2019: 223).

Además de refutar las bases políticas e ideológicas del modelo, estas agencias han contribuido a extender una subjetividad con capacidad de “traspasar los límites instituidos”. Acontece con las luchas sindicales, cuya eficacia en denunciar las injusticias del régimen de trabajo y sensibilizar a la opinión pública estriba en el uso de diversas formas de lucha, incluyendo extralegales. Y si bien el creciente número de huelgas no representa una radicalidad del movimiento de trabajadores, “sí indican –señalan diversos autores– que la institucionalidad laboral [se halla] deslegitimada y sobrepasada de facto” (Julián-Vejar *et al*, 2022: 90). Empero, clave en agenciar un país diferente, politizar las demandas y sembrar nuevos sentidos comunes es la gestión municipal de Recoleta. Al franquear los marcos legales impuestos por la mercantil Constitución de 1980 (que restringen las competencias y atribuciones económicas a los gobiernos comunales) y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, las innovadoras políticas implementadas por este municipio comunista habrían posibilitado en los imaginarios sociales chilenos “[ir] corriendo el cerco de lo posible”:

Hace mucho rato –subraya Daniel Jadue⁴⁹– que nosotros empezamos a transformar Chile desde Recoleta. Recoleta ha estado durante ocho años

⁴⁸ <https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/10/27/los-motivos-de-la-abrumadora-victoria-del-apruebo-en-las-zonas-de-sacrificio.html>

⁴⁹ Al momento de redactar este artículo, Daniel Jadue fue imputado por la justicia chilena en un típico caso de *Lawfare*. La evidente complicidad entre instituciones estatales, poderes empresariales y medios de comunicación para montar un caso judicial, deslegitimar la gestión del alcalde y condenarlo anticipadamente, está en directa relación con el hecho de ser este edil la principal voz antisistema en Chile. Este caso

*corriendo el cerco de lo posible, y demostrándole a todas y todos que un estado comprometido con los derechos de las personas, con los derechos sociales, con los derechos civiles de las personas –con un enfoque, además, de sociedad de bienestar que proteja a sus ciudadanos– es posible*⁵⁰.

Por consiguiente, 2019 anuncia la progresiva pero conflictiva aparición de un nuevo escenario social. No por alcanzar concreción material sino por su disruptiva dimensión ideológica y cultural. Precisamente, la creciente disputa por los imaginarios históricos, valores éticos, relatos sociales, políticas públicas y visión de país da cuenta de un clima que ha erosionado la noción de “realismo político”; desnaturalizado el modelo de sociedad imperante; y trastocado “el sentido de la historia” propagado por la ideología neoliberal. Posibilitando –por vez primera en décadas– “abrir el horizonte de lo posible”. En consecuencia, como pronosticara Manuel Antonio Garretón, Chile parece dirigirse hacia un nuevo ciclo político, uno caracterizado por proyectos políticos en disputa: entre quienes defienden el actual modelo de sociedad y aquellos que promueven un nuevo orden social. La demanda por un cambio constitucional y visualizar un ordenamiento pos neoliberal lo confirman (Garretón, 2016)⁵¹. Problemática reconocida por Joaquín Lavín, ideólogo local de la sociedad de mercado: “hay que tener claro que estamos ante un nuevo Chile y la Convención [Constitucional] que se está eligiendo es un mosaico de este Chile nuevo”⁵².

Los antecedentes reseñados sugieren que el escenario detonado en el 2019 se acerca lo que algunos autores denominan como “ruptura populista”, es decir: “el momento cero de producción de un nuevo orden social” (Adrián: 2014: s/p). La intención de avanzar hacia un estado social, plurinacional, feminista, ecologista y democrático, constata el progresivo proceso de apropiación de nuevos sentidos comunes. Y si bien activa prejuicios y temores en numerosos sectores cuando son traspasados los valores consagrados, no excluye que más de la mitad de quienes optaran por rechazar la propuesta de Constitución de 2022 sostenga la necesidad de cambios en términos de geometría institucional, derechos sociales, base impositiva, relaciones sociales de producción; obstaculizando los esfuerzos de los sectores más mercantilizados por retrotraer al país al estado de cosas previo al

evidencia el doble estándar, sesgo de clase y motivaciones políticas con la cual operan los tribunales de justicia, ahondando el malestar social con estas instituciones.

⁵⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=Nd1g-or-B7U> cursivas mías.

⁵¹ Este reconocido sociólogo anticipó que las movilizaciones estudiantiles del 2011 abrirían un nuevo ciclo político, pero no habría solución a la crisis de representación “sin desencadenamiento de un proceso constituyente” (Garretón, 2016: 35).

⁵² <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57140964>

18 de octubre. Empero, como enseñan experiencias signadas por la disputa entre preservar hegemonía o instituir una nueva, de la eficacia de sus promotores en establecer inéditas pautas simbólicas e institucionales dependerá la emergencia de un ordenamiento más inclusivo y democrático. De lo contrario –como suele acontecer también bajo este tipo de escenario– las mismas circunstancias tienden a generar las condiciones de posibilidad para que los sectores perjudicados y quienes gestionan los cambios terminen por converger, al forjar un patrón político típicamente *gatopardiano*.

Bibliografía

- Adrianzén, C. (2010). De Soto y la (im) posible apuesta por un neoliberalismo popular. *V Congreso latinoamericano de Ciencia Política*. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires: s/p. <https://cdsa.academica.org/000-036/22.pdf>
- Álvarez, A. (2011). “Tenemos razón y somos mayoría”: El movimiento estudiantil secundario chileno en 2006, *Conflicto Social*, 4 (5), junio, 407-433. <https://publicaciones sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/385>
- Avendaño, O. y Osorio, N. (2021). Propuestas de cambio y debilidad institucional en Chile: De la revuelta social (2019) al inicio del funcionamiento de la Convención Constitucional (2021). *Revista de Ciencias Sociales Ambos Mundos*, (2), 7-18. DOI: <https://doi.org/10.14198/ambos.20978>
- Astudillo, F. *et al* (2024). Zonas de Sacrificio en Chile. Justicia espacial/ambiental, trayectorias geográficas y las derivas del acontecimiento, *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 28 (2), 19-58. DOI: <https://doi.org/10.1344/sn2024.28.41966>
- Blanco, O. y Julián-Vejar, D. (2019). Una tipología de la precariedad laboral en Chile, *Revista de la CEPAL*, 129, 99-137.
- Castiglioni, R. (2019). ¿El ocaso del <<modelo chileno>>? *Nueva Sociedad*, 284, 4-14. <https://www.nuso.org/articulo/el-ocaso-del-modelo-chileno/>
- CEPAL. (2016). *La matriz de la desigualdad social en América Latina*, Santiago.

- Correa, J. *et al.* (2020). Gini Coefficient for Water Resources in Chile, *Water*, 12 (12), 3369. DOI: <https://doi.org/10.3390/w12123369>
- Dobry, M. (1988). *Sociología de las crisis políticas*, Madrid: CIS/Siglo XXI Editores.
- Dubet, F. (2021). *La época de las pasiones tristes. De cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento, y desalienta la lucha por un mundo mejor*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Durán, G. y Kremerman, M. (2020). Los Verdaderos Sueldos de Chile. Panorama Actual del Valor de la Fuerza del Trabajo Usando la Encuesta Suplementaria de Ingresos ESI (2019), Fundación Sol, noviembre. ISSN: 0719-6695 [https://fundacionsol.cl/cl_luzit_herramientas/static/adjuntos/6700/VS2020\(esi2019\)-1.pdf](https://fundacionsol.cl/cl_luzit_herramientas/static/adjuntos/6700/VS2020(esi2019)-1.pdf)
- Filgueira, F. *et al.* (2012). Crisis de incorporación en América Latina: límites de la modernización conservadora. *Perfiles latinoamericanos*, 40, 31-58. DOI: <https://doi.org/10.18504/pl2040-007-2012>
- Flores, T. (2020). Crisis en Chile. *Foreign Affairs Latinoamérica*, 20 (2), 40-46.
- Follegati, L. (2020). “Nos quitaron hasta el miedo”: Los feminismos en la revuelta social chilena, *LASA FORUM*, 51 (4), 4-10. <https://forum.lasaweb.org/files/vol51-issue4/Dossier-1.pdf>
- Gálvez, R. y Kremerman, M. (2019). ¿AFP para quién?, Dónde se invierten los Fondos de Pensiones en Chile, Fundación Sol, *Ideas para el Buen Vivir*, 15. ISSN 0719-6741. https://fundacionsol.cl/cl_luzit_herramientas/static/wp-content/uploads/2019/07/TEXG-4.pdf
- Garretón, M. (2016). Crisis de representación, movilizaciones sociales y elecciones presidenciales 2013 en Chile. En: Mayorga, F. (Comp.) (2016). *Elecciones y legitimidad democrática en América Latina* (pp. 15-38), CESU-UMSS / CLACSO / IESE / Plural editores.
- Garrido, M. *et al.* (2015). Conflictos socioambientales en Chile: la re-emergencia de racionalidades alternativas. *Cuadernos del CENDES*, año 32, 88. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_cc/article/view/9194

- González, J. *et al.* (2008). Perspectivas y significados del Movimiento Nacional de Estudiantes Secundarios chilenos. *Revista Némesis*, (6), 41-46. <https://revistanemesis.uchile.cl/index.php/RN/article/view/66603>
- Gutiérrez, F. (2020). Contesting the Neoliberal Order through Legal Mobilisation: The Case of Chilean Unions, *Journal of Latin American Studies*, 52, 575-599.
- Julián-Vejar, D. *et al.* (2022). Sindicalismo y revuelta popular en Chile (2019). Entre la ofensiva neoliberal y el movimiento pendular. En: Julián-Vejar, D. y Galliorio, A. (2022). *Estudios del trabajo desde el sur* (pp. 83-106). Santiago: Ariadna Editores. DOI: <https://doi.org/10.26448/ae9789566095491.32>
- Lamadrid, S. y Benitt, A. (2019). Cronología del movimiento feminista en Chile 2006-2016. *Revista de Estudios Feministas*, 27 (3), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n354709>
- Leyton, C. (2020). *La ciencia de la erradicación. Modernidad urbana y neoliberalismo en Santiago de Chile, 1973-1990*, Madrid: Editorial CSIC.
- López Tapia, A. (2013). *¿Qué es la Deconstrucción?*, S/E.
- Mate, Reyes. (2006). *Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamín. <<Sobre el concepto de la historia>>*. Madrid: Editorial Trotta.
- Mayol, A. (2020). *Big Bang. Estallido social 2019. Modelo derrumbado – Sociedad rota – Política inútil*. Santiago: Catalonia.
- Morales, M. (2020). Estallido social en Chile 2019: participación, representación, confianza institucional y escándalos públicos. *Análisis Político*, 98, 3-25. <https://doi.org/10.15446/anpol.v33n98.89407>
- Núñez, O. y Palomé, V. (2022). Una modernidad (des) integradora. Voces de la derecha chilena post estallido social, *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 132, 169-193. DOI: <https://doi.org/doi.org/10.24241/rcai.2022.132.3.169>
- PNUD. (2024). *Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024. ¿Por qué nos cuesta cambiar?: conducir los cambios para un Desarrollo Humano Sostenible*. Santiago de Chile. ISBN: 978-956-6057-42-0

PNUD. (2017). *Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*, Santiago, Uqbar. ISBN: 978-956-7469-86-4

PNUD. (1998). *Desarrollo humano en Chile. Las paradojas de la modernización*, Santiago. <https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/las-paradojas-de-la-modernizacion>

Rivera, R. *et al.* (2018). Financiamiento de la Educación Superior en Chile a través del Crédito con Aval del Estado (CAE). Una oportunidad para la inclusión o el aumento de la brecha social, en: Rivera, R. *et al.* (Ed.) *Políticas Públicas para la Equidad Social*, vol. I, Santiago de Chile: Colección Políticas Públicas, Universidad de Santiago de Chile.

Santos, A. (2019). ¿La igualdad de género en la universidad para cuándo? Movimiento feminista universitario de Chile. En: Sofía Schuster, *et al* (2019), Una mirada al movimiento feminista en Chile del año 2018: hitos, agendas y desafíos, *Iberoamericana*, 72. DOI: <https://doi.org/10.18441/ibam.19.2019.72.223-245>

Urzúa, J y Calderón, M. (2020). Economía moral y estallido social: no son 30 pesos, son 30 años. La crisis del neoliberalismo en Chile. *Revista Antropologías del Sur*, 14, 283-298. <https://doi.org/10.25074/rantros.v7i14.1821>

Velasco, J. (2008). Democratización y conflictos distributivos en América latina, en: Ansaldi, W. (director) *et al.* *La democracia en América latina, un barco a la deriva*, Buenos Aires: FCE.

Villalobos, C. y Ortiz, C. (2019). Continuidades y rupturas de la protesta universitaria en el Chile de la posdictadura (1990-2014). *Revista Temas Sociológicos*, 24, 89-120. DOI: <https://doi.org/10.29344/07196458.24.1966>

Volpi, F. (2007). *El Nihilismo*, Madrid: Siruela.



© del artículo, los/as autores/as

Este texto está protegido por una licencia Reconocimiento [Creative Commons 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Usted es libre para Compartir —copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato— y Adaptar el documento —remezclar, transformar y crear a partir del material— para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de:

Atribución: Usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.

[Resumen de licencia](#) - [Texto completo de la licencia](#)